

**Asamblea General**

Distr. limitada
5 de marzo de 2007
Español
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional**
Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia)
32º período de sesiones
Nueva York, 14 a 18 de mayo de 2007

**Tratamiento de los grupos de sociedades en situaciones
de insolvencia****Nota de la Secretaría****Índice**

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
III. Comienzo de la insolvencia: cuestiones de ámbito nacional	1-49	2
B. Tratamiento de los bienes al abrirse un procedimiento de insolvencia (<i>continuación</i>)	1-17	2
5. Anulación	1-8	2
6. Subordinación	9-17	5
C. Vías de recurso	18-39	7
1. Introducción	18-20	7
2. Mandamientos de aportación	21-22	8
3. Consolidación de patrimonios o integración en masa única	23-39	9
D. Reorganización	40-48	15
E. Otras Cuestiones	49	17



III. Comienzo de la insolvencia: cuestiones de ámbito nacional

B. Tratamiento de los bienes al abrirse un procedimiento de insolvencia (*continuación*)

5. Anulación

[Referencia: Guía Legislativa: segunda parte, cap. II, párrs. 148 a 203 y recomendaciones 87 a 99]

1. Las recomendaciones de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia¹ relativas a la anulación se aplicarían en general a la anulación de operaciones en el contexto de un grupo de sociedades, si bien cabría aplicar consideraciones suplementarias a las operaciones entre las empresas integrantes del grupo. Puede requerirse una inversión considerable en tiempo y dinero para desentrañar las operaciones internas del grupo a fin de determinar si alguna de ellas está sujeta a anulación. Algunas operaciones que podrían parecer preferentes o infravaloradas entre las partes inmediatas podrían verse de modo distinto si se tenía en cuenta el contexto más amplio de un grupo estrechamente integrado, en el que los beneficios y perjuicios de las operaciones pueden estar distribuidos de forma más amplia. Del mismo modo, algunas operaciones realizadas en el marco de un grupo que pudieran tener fines legítimos no tendrían lugar al margen del grupo si los beneficios y perjuicios fueran analizados con criterios comerciales normales.

2. Las operaciones internas pueden consistir en actividades comerciales entre empresas del grupo; la transmisión de beneficios de la filial a la sociedad matriz; préstamos concedidos por una empresa a otra para mantener en marcha el comercio de la empresa que recibe el préstamo; transferencias de bienes y garantías entre empresas del grupo; pagos de una empresa a un acreedor de una empresa conexa; una garantía o una hipoteca concedida por una empresa del grupo para respaldar un préstamo otorgado por una parte externa a otra empresa del grupo; o una serie de diversas operaciones. Es posible que un grupo siga la práctica de colocar todo el dinero y todos los bienes disponibles en el grupo con miras a una óptima utilización comercial en interés del grupo en su totalidad en vez de hacerlo en beneficio de la empresa del grupo a la que pertenezcan. Esto puede incluir el traspaso de dinero en efectivo de las filiales a la empresa financiadora del grupo. Si bien esta práctica tal vez no beneficie óptimamente a la filial, algunos regímenes permiten a los directores de filiales de total propiedad, por ejemplo, actuar como tales, siempre y cuando ello favorezca al máximo a la sociedad matriz.

3. Puede determinarse que algunas de las operaciones realizadas en el contexto de un grupo entren en las categorías de operaciones sujetas a anulación en virtud de la recomendación 87² de la Guía Legislativa. Es posible que otras operaciones no

¹ Guía Legislativa de la CNUDMI, recomendaciones 87 a 99.

² La recomendación 87 dispone lo siguiente:

Operaciones anulables

87. El régimen de la insolvencia debería establecer disposiciones con efecto retroactivo, concebidas para revocar toda operación realizada por el deudor o de la que hayan sido objeto bienes de la masa y que haya disminuido el valor de ésta o violado el principio del trato

entren con tanta evidencia en el ámbito de la recomendación 87 y que se planteen cuestiones como la de hasta qué punto el grupo era administrado como una única empresa o la de si los bienes y deudas de las empresas del grupo estaban muy entremezcladas, pudiendo así afectar a la naturaleza de las operaciones entre empresas del grupo y entre empresas del grupo y acreedores externos. También puede haber operaciones que no entren en el ámbito de las disposiciones sobre anulación. Por ejemplo, algunos regímenes de la insolvencia pueden prever la anulación de pagos preferentes efectuados en beneficio de los propios acreedores del deudor, pero no a los acreedores de una empresa conexas del grupo, a menos que el pago se realice, por ejemplo, de conformidad con una garantía.

4. Las operaciones entre empresas de un grupo de sociedades podrían quedar abarcadas por las disposiciones de un régimen de la insolvencia que regularan las operaciones entre personas allegadas. En la definición de “persona allegada” en la Guía Legislativa se incluyen las empresas integrantes de un grupo de sociedades tales como un pariente, un socio o una sucursal o filial de la empresa insolvente del grupo contra la que se haya abierto un procedimiento de insolvencia, o una persona, inclusive una persona jurídica, que ejerza o que haya ejercido algún tipo de control sobre el negocio del deudor. Es frecuente que para esas operaciones los regímenes de la insolvencia prevean reglas de anulación más estrictas que para otras operaciones, en particular en lo relativo a la duración de los períodos de sospecha, así como a presunciones o a cargas de la prueba invertidas, a fin de facilitar el procedimiento de anulación³ o no aplicando los requisitos de que el deudor fuera insolvente en el momento de la operación o pasara a serlo a raíz de la misma. Cabe justificar un régimen más estricto por el hecho de que esas partes tienen más probabilidades de resultar favorecidas y, cuando el deudor está realmente en dificultades financieras, suelen tener conocimiento de ello antes que otras personas.

5. Un enfoque de la carga de la prueba en el caso de las operaciones realizadas con personas allegadas podría consistir en que pudiera considerarse o presumirse

equitativo de los acreedores. El régimen de la insolvencia debería especificar que serán anulables los siguientes tipos de operaciones:

a) Toda operación cuya finalidad sea impedir, demorar u obstaculizar el cobro de los respectivos créditos de los acreedores, cuando la operación pueda dejar ciertos bienes fuera del alcance de acreedores ya existentes o potenciales o perjudicar de algún otro modo los intereses de los acreedores;

b) Toda operación por la que el deudor transmita un derecho real sobre sus bienes o contraiga una obligación y tal transmisión o compromiso constituyan una donación y que se haya realizado o contraído por un contravalor nominal inferior o insuficiente siendo el deudor ya insolvente o cuando, a raíz de tal operación, el deudor haya pasado a ser insolvente (operaciones infravaloradas); y

c) Toda operación en que intervengan los acreedores por la que alguno de ellos obtenga una proporción de los bienes del deudor superior a su cuota de la masa prorrataada o perciba beneficios de dicha proporción y que se realice siendo ya el deudor insolvente (operaciones preferentes).

³ Véase la recomendación 97 de la Guía Legislativa, cuyo texto dispone lo siguiente:

97. El régimen de la insolvencia debería especificar los elementos que habrán de probarse a fin de anular una determinada operación, la parte que deberá probar dichos elementos y las posibles excepciones que podrán oponerse a tal anulación. Como excepción cabrá alegar, entre otras cosas, que la operación se llevó a cabo en el curso ordinario de los negocios antes de la apertura del procedimiento de insolvencia. El régimen podrá también establecer presunciones y permitir la inversión de la carga de la prueba para facilitar los procedimientos de anulación.

que ha habido intencionalidad o mala fe cuando se realicen ciertos tipos de operaciones durante el período de sospecha, y en que sea la otra parte en la operación quien tenga que probar que no fue así. En el contexto de los grupos de sociedades, algunos regímenes han establecido la presunción rebatible de que las operaciones entre empresas de grupos de sociedades y entre esas empresas y los accionistas de ese grupo empresarial serían perjudiciales para los acreedores y que, por consiguiente, podrían ser objeto de anulación. Además, las reclamaciones de la empresa pertinente del grupo podían ser objeto de un trato especial y cabría diferir o subordinar las reclamaciones de empresas conexas del grupo podrían ser objeto de un trato especial y cabría diferir los acuerdos sobre las deudas internas del grupo o subordinarlos a los derechos de los acreedores externos de las empresas insolventes del grupo (sobre la subordinación, véase más abajo).

6. Con respecto a la apertura de las acciones de anulación, el nivel de integración de las empresas del grupo puede ejercer también una notable influencia en la capacidad de los acreedores para identificar la empresa del grupo con la que tuvieron tratos, cuando el régimen de la insolvencia les permite abrir procedimientos de anulación.

Recomendaciones

Anulación

20) El régimen de la insolvencia debería especificar que, al estudiar si debería o no anularse una operación del tipo mencionado en la recomendación 87 a), b) o c) de la Guía Legislativa que hubiera tenido lugar entre personas allegadas en el contexto de un grupo de sociedades, el tribunal podrá tomar en consideración las circunstancias del grupo en las que se produjo la operación. Esas circunstancias pueden ser, entre otras: el grado de integración entre las empresas que formen parte del grupo y que sean partes en la operación; la finalidad de la operación; y si la operación concedía ventajas a empresas del grupo que normalmente no se otorgarían entre partes inconexas.

21) El régimen de la insolvencia podría especificar que, con respecto a los elementos mencionados en la recomendación 97 de la Guía Legislativa y su aplicación en el contexto de un grupo de sociedades, procede aplicar disposiciones especiales sobre las excepciones y presunciones.

Notas sobre las recomendaciones

7. En la recomendación 20) se toma nota del hecho de que las operaciones efectuadas dentro de un grupo de sociedades plantean consideraciones adicionales, además de las que ya se aplican generalmente a las operaciones entre partes conexas. Si bien las disposiciones de la Guía Legislativa serían generalmente aplicables, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la posibilidad de que en las recomendaciones se reflejen esas consideraciones suplementarias.

8. En su 31º período de sesiones, el Grupo de Trabajo observó que una aplicación amplia de las presunciones rebatibles concernientes a las operaciones entre empresas de un grupo y entre dichas empresas y los accionistas del grupo pertinente podría resultar perjudicial para los acreedores y que tales presunciones deberían

anularse⁴. La recomendación 21) señala la necesidad de que se preste una especial atención a la aplicación de las disposiciones referentes a la carga de la prueba, así como a la utilización de presunciones en el contexto de grupos de sociedades, sin entrar en detalles.

6. Subordinación

[Referencia: Guía Legislativa: segunda parte, cap. V, párrs. 55 a 61]

9. En la Guía Legislativa se indica⁵ que la subordinación consiste en un reajuste de los grados de prelación de los acreedores en la insolvencia y que no guarda relación con la validez o la legalidad del crédito. No obstante la validez de un crédito, cabría sin embargo subordinarla ya fuera mediante un acuerdo voluntario o mediante una orden judicial. Dos tipos de créditos que normalmente pueden subordinarse en caso de insolvencia son los presentados por personas allegadas al deudor y por propietarios accionistas del deudor.

a) *Créditos de personas allegadas*

10. En el contexto de un grupo de sociedades, la subordinación de créditos de una persona allegada podría suponer, por ejemplo, que los derechos de las empresas del grupo conforme a los acuerdos internos concertados en el grupo podrían subordinarse a los créditos de los acreedores externos de las empresas del grupo que estuvieran sujetas a un procedimiento de insolvencia.

11. Como ya se ha señalado, el concepto de “persona allegada”, tal como se emplea en la Guía Legislativa, incluiría a las empresas integrantes de un grupo de sociedades. El mero hecho de que exista una relación especial con el deudor, como, por ejemplo, en el contexto de un grupo de sociedades el hecho de constituir una empresa más del mismo grupo, puede no resultar suficiente en todos los casos para justificar que se dispense un trato especial al crédito de un acreedor. En algunos casos, esos créditos serán totalmente transparentes y deberían tratarse del mismo modo que créditos similares presentados por acreedores que no sean personas allegadas; en otros casos, pueden engendrar sospechas y merecerán una especial atención. Es posible que un régimen de la insolvencia necesite prever un mecanismo para identificar esos tipos de conductas o situaciones en que los créditos merecerán una mayor atención. Como se señala más arriba, se aplicarán consideraciones similares a la anulación de toda operación concertada entre empresas de un grupo de sociedades.

12. En la Guía Legislativa se especifica una serie de situaciones en las que podría justificarse dar un trato especial al crédito de una persona allegada (por ejemplo, cuando el deudor tenga una grave deficiencia de capital y cuando se disponga de pruebas de que se ha actuado en provecho propio). En el contexto de un grupo de sociedades, otras consideraciones que cabría tener en cuenta, entre una sociedad matriz y una filial controlada, serían la participación de la sociedad matriz en la gestión de la filial; el hecho de que la sociedad matriz haya tratado de manipular las operaciones realizadas entre empresas del grupo en beneficio propio y a expensas de

⁴ Informe del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) sobre la labor de su 31º período de sesiones (A/CN.9/618, párr. 44).

⁵ Guía Legislativa de la CNUDMI, segunda parte, cap. V, párr. 56.

los acreedores externos; o la cuestión de si la empresa matriz ha actuado por lo demás injustamente, en perjuicio de los acreedores y accionistas de la empresa del grupo controlada. En algunos regímenes, la existencia de tales circunstancias puede dar lugar a que la sociedad matriz subordine sus créditos a los de acreedores no garantizados inconexos o incluso de accionistas minoritarios de la empresa controlada.

13. Algunos regímenes prevén otros enfoques de las operaciones internas de un grupo de sociedades, como la autorización de que las deudas contraídas por una empresa del grupo, que solicitó un crédito en virtud de un acuerdo sobre préstamos dentro del grupo, queden involuntariamente subordinadas a los derechos de los acreedores externos de la empresa que haya solicitado el crédito, permitiendo al tribunal examinar los acuerdos financieros concertados en el grupo con el fin de determinar si los fondos particulares concedidos a una empresa de un grupo deberían considerarse una contribución en capital social, más que un préstamo, en que las contribuciones en capital social son subordinadas a los créditos de los acreedores (sobre el trato dado al capital social, véase más abajo); y la autorización de la subordinación voluntaria de créditos internos del grupo a los de los acreedores externos.

14. El resultado práctico de una orden de subordinación, en el contexto de un grupo de sociedades, podría consistir en reducir o en cancelar efectivamente todo reembolso a las empresas de ese grupo cuyos créditos hayan sido subordinados si los créditos de los acreedores externos garantizados y ordinarios se elevan a una cantidad muy superior a los fondos disponibles para la distribución. En algunos casos, esto podría poner en peligro la viabilidad de la empresa subordinada del grupo y perjudicar no sólo a sus propios acreedores sino también a sus accionistas.

b) Trato dado al capital social

15. La Guía Legislativa señala⁶ que en muchos regímenes de la insolvencia se hace la distinción entre los créditos de los propietarios y los de los accionistas que pueden derivarse de préstamos concedidos al deudor o de su derecho de propiedad sobre el patrimonio del deudor. Con respecto a los créditos que se deriven del capital social, en muchos regímenes de la insolvencia se adopta la regla general de que los propietarios y los accionistas de la empresa no tienen derecho a la distribución del producto de los bienes hasta que se hayan reembolsado íntegramente todos los créditos que gocen de un mayor grado de prelación (incluidos los créditos por concepto de intereses devengados desde la apertura). Como tales, esas partes raras veces recibirán una parte de lo distribuido por concepto de sus derechos sobre el deudor. Cuando se hace una distribución, generalmente se efectúa de conformidad con la clasificación de las acciones especificadas en el derecho de sociedades y en la escritura de constitución de la empresa. Sin embargo, no siempre se subordinan los créditos en concepto de deuda, como los relativos a préstamos.

16. Pocos son los regímenes de la insolvencia que regulan expresamente la subordinación de créditos de capital social en el contexto de los grupos de sociedades. Un régimen que sí la regula permite a los tribunales examinar los acuerdos financieros entre empresas de un grupo de sociedades para determinar si

⁶ Guía Legislativa de la CNUDMI, segunda parte, cap. V, párr. 76.

ciertos fondos que se hayan entregado a una de las empresas que ahora esté sujeta a un procedimiento de insolvencia deberán tratarse como aportaciones de capital social (lo que permite subordinarlos a los créditos de los acreedores), y no como préstamos internos. Es probable que esos fondos sean considerados capital social, cuando el coeficiente original entre la deuda y el capital social haya sido alto antes de que se aportaran los fondos y de que éstos redujeran el coeficiente; cuando el capital en acciones pagado sea insuficiente; cuando resulte improbable que un acreedor externo haya concedido un préstamo en las mismas circunstancias; y cuando las condiciones en que se haya efectuado el anticipo no sean razonables y no quepa esperar razonablemente el reembolso.

17. El Grupo de Trabajo tal vez desee plantearse la necesidad de que se formulen recomendaciones para regular la subordinación en el contexto de grupos de sociedades, así como las circunstancias en que la subordinación pudiera ser apropiada.

C. Vías de recurso

1. Introducción

18. Debido a la naturaleza de los grupos de sociedades y a la forma en que funcionan, es posible que, como ya se señaló, exista una compleja red de operaciones financieras entre sus integrantes, y que los acreedores, en vez de tratar con una empresa determinada del grupo, tal vez lo hayan hecho con distintas empresas del grupo o, incluso, con el grupo como entidad económica única. Desentrañar la propiedad del activo y del pasivo y determinar quiénes son los acreedores de cada empresa del grupo puede requerir una compleja y costosa indagación judicial. Sin embargo, dado que la adhesión al criterio de entidad independiente significa que los acreedores de cada empresa del grupo deben acudir en general a esa entidad independiente para obtener el pago de la deuda, y, cuando se haya iniciado un procedimiento de insolvencia contra una o más empresas del grupo de que se trate, por lo general será necesario esclarecer a quién pertenece el activo y el pasivo de la masa de las entidades insolventes.

19. Cuando se consigue efectuar la disociación, conforme al principio de la entidad independiente, el acreedor podrá cobrar sus créditos únicamente con cargo a los bienes de la entidad insolvente del grupo. Cuando la disociación sea imposible o existan otras razones específicas que justifiquen tratar al grupo como unidad económica única, algunas leyes prevén la posibilidad de soslayar en determinadas circunstancias la aplicación del criterio de la entidad independiente. Ha sido costumbre instituir las vías de recurso que lo posibilitan para subsanar lo que se ha percibido como funcionamiento ineficiente e injusto, en ciertos casos, del tradicional criterio de la entidad independiente. Además de soslayar las operaciones entre empresas de un grupo o de subordinar los préstamos entre empresas de un grupo, cabe mencionar otros recursos como la extensión de la responsabilidad por las deudas externas a otras empresas solventes del grupo, así como a los titulares de cargos y a los accionistas; la posibilidad de dictar mandamientos de aportación; y la posibilidad de dictar órdenes de consolidación de patrimonios o de integración en masa única. Algunos de estos recursos requieren que se dictamine culpa o falta, mientras que otros se basan en la demostración de ciertos hechos con respecto a las

operaciones del grupo de sociedades. En algunos casos, particularmente cuando ha habido negligencia en la gestión, podrían resultar más apropiados otros recursos, como la destitución de los directores responsables y la limitación de la participación de los órganos de gestión en la reorganización.

20. Dada la inequidad potencial que puede derivarse de la situación en que un grupo de acreedores se ve obligado a participar en una distribución *pari passu* con los acreedores de otra entidad perteneciente al grupo que tal vez tenga menos solvencia, las vías de recurso enumeradas no se prevén en todos los ordenamientos, por lo general no tienen gran alcance y rigen únicamente en circunstancias restringidas. Los recursos destinados a extender la responsabilidad pueden entrañar “descorrer” o “levantar el velo del secreto empresarial”, lo cual significa que los accionistas, que en general no asumen responsabilidad por la actividad mercantil de la sociedad, pueden pasar a ser responsables de determinadas actividades. No sucede así con las demás vías de recurso examinadas, aunque en algunas circunstancias podrían tener un efecto aparentemente similar.

2. Mandamientos de aportación

21. Un mandamiento de aportación es una orden por la que un tribunal podrá exigir a una empresa solvente de un grupo de sociedades que aporte una cuantía determinada de capital para cubrir la totalidad o parte de las deudas de otras empresas del grupo sometidas a un procedimiento de liquidación. Si bien los mandamientos de aportación no están ampliamente difundidos en los regímenes de la insolvencia, en varios ordenamientos se ha adoptado o se está estudiando la posibilidad de adoptar esas medidas. En los regímenes que sí permiten los mandamientos de aportación, tal como se ha señalado más arriba, el problema de la conciliación de los intereses de los dos grupos de acreedores no garantizados que han tenido tratos con dos empresas distintas pertenecientes al grupo, ha tenido como consecuencia que no se ejerza comúnmente la facultad para dictar un mandamiento de aportación. Además, los tribunales han considerado que un mandamiento de aportación pleno puede no ser procedente si pone en riesgo la solvencia de la empresa conexa aún no sometida a liquidación, si bien cabría ordenar una aportación parcial que se limitara a determinados bienes, como el saldo restante después del cumplimiento de buena fe de las obligaciones.

22. Conforme a lo dispuesto en un régimen que sí prevea los mandamientos de aportación, el tribunal debe tener en cuenta ciertas circunstancias concretas al plantearse la posibilidad de dictar un mandamiento: el grado en que una empresa conexa haya participado en la dirección y gestión de la empresa sometida a liquidación; el comportamiento de la empresa conexa hacia los acreedores de la empresa sometida a liquidación, aunque el hecho de que los acreedores invoquen la existencia de una vinculación entre las empresas no sea causa suficiente para dictar un mandamiento; hasta qué punto las circunstancias que precipitaron la liquidación son atribuibles a los actos de la empresa conexa; la gestión de la empresa solvente tras la apertura del procedimiento de liquidación de su empresa conexa, particularmente si afecta directa o indirectamente a los acreedores de la empresa conexa, como en el caso del incumplimiento de un contrato; y toda otra cuestión que el tribunal estime conveniente⁷.

⁷ New Zealand Companies Act 1993, secciones 271 1) a) y 272 1).

3. Consolidación de patrimonios o integración en masa única

a) *Introducción*

23. Otra vía de recurso es la consolidación de patrimonios o integración en masa única (denominada “consolidación”). Tal como se ha señalado, en un procedimiento de administración conjunta, el activo y el pasivo de los deudores siguen siendo independientes y diferenciados, sin que los derechos sustantivos de los acreedores se vean menoscabados. En una consolidación, en cambio, el tribunal que entiende en la causa por insolvencia de dos o más empresas de un mismo grupo puede no tomar en consideración la identidad jurídica propia de cada una de ellas en circunstancias procedentes y ordenar la consolidación de sus activos y pasivos a fin de tratarlos como si correspondieran a una única entidad. Como consecuencia de ese acto se crea una única masa de la insolvencia en beneficio general de todos los acreedores de todas las entidades cuyo patrimonio se haya consolidado. La consolidación afectaría por lo general a las empresas del grupo contra las cuales se hubieran abierto procedimientos de insolvencia, pero en algunos casos puede hacerse extensiva a una empresa solvente del grupo, cuando los negocios de dicha empresa estén muy entremezclados con los de otras empresas del grupo, de modo que resultara beneficioso incluir a la empresa solvente en la consolidación. Puede incluso hacerse extensiva a particulares, como, por ejemplo, al accionista con participación dominante. Si bien la consolidación suele requerir un mandamiento judicial, también puede ser posible decidirla sobre la base del consenso entre las partes interesadas pertinentes o por medio de un plan de reorganización aprobado.

24. La vía de recurso del mandamiento de consolidación⁸ no está muy extendida en las legislaciones y, cuando está prevista, no suele recurrirse a ella con mucha frecuencia. A pesar de la falta de base legislativa directa o de una normativa que prescriba las circunstancias en que procede dictar tal mandamiento, los tribunales de algunos países han participado directamente en la evolución de ese recurso y han delimitado las circunstancias en que puede utilizarse. Esta práctica refleja el creciente reconocimiento judicial de la amplia utilización de las estructuras de grupos de empresas conexas a efectos fiscales y mercantiles. Como sucede en el mandamiento de aportación, las circunstancias que darían pie a que se dictara un mandamiento de consolidación son muy pocas y tienden a circunscribirse a los supuestos en que, a causa del alto grado de integración de las empresas de un grupo de sociedades, ya sea mediante el control o mediante la propiedad, sería muy difícil, cuando no imposible, diferenciar el activo y el pasivo de cada una de las entidades del grupo y administrar por separado el patrimonio de cada deudor.

25. El recurso de la consolidación suele plantearse en el contexto de un procedimiento de liquidación, y las legislaciones que autorizan tales mandamientos únicamente los permiten en el contexto de una liquidación. No obstante, existen propuestas legislativas que permitirían la consolidación en el contexto de diversos tipos de reorganización. En los ordenamientos que carecen de legislación específica, puede ocurrir que los mandamientos de consolidación estén permitidos tanto en la liquidación como en la reorganización, por ejemplo, cuando tal mandamiento contribuya a la reorganización del grupo.

⁸ *Ibid.*, sección 272.

26. La consolidación podría ser apropiada cuando pudiera incrementar el valor de la suma distribuida entre los acreedores, ya sea debido a la relación estructural entre las entidades del grupo y a la forma en que llevan a cabo sus negocios y sus relaciones financieras, o debido al valor de los bienes comunes de todo el grupo, como la propiedad intelectual en un proceso realizado entre numerosas empresas del grupo, y al producto de ese proceso. También podría darse la situación en que no hubiera una verdadera separación entre las sociedades de un grupo y en que se mantuviera la estructura del grupo únicamente con fines poco honrados o fraudulentos. Dado que el comercio entre las empresas integrantes de grupos se está convirtiendo cada vez más en norma de la actividad mercantil, la consolidación podría permitir a un representante de la insolvencia centrarse en las deudas externas del grupo cuando las deudas internas desaparecieran a raíz de la consolidación (cuestión analizada más adelante).

27. El principal problema que plantea el recurso a un mandamiento de consolidación, sumado al problema fundamental de no tener en cuenta el principio de la persona jurídica independiente, radica, como ya se ha dicho, en que la consolidación puede resultar inicua para un grupo de acreedores que se vean obligados a compartir *pari passu* la distribución de la masa con los acreedores de otra empresa del grupo que tal vez sea menos solvente, y en la cuestión de si el ahorro de gastos o de los beneficios aportados al conjunto de acreedores compensan el perjuicio que ello acarrea a distintos acreedores. Los acreedores que se opongan a la consolidación pueden sostener que, dado que contaban con los bienes propios de una determinada entidad del grupo, al comerciar con ella, no se les debería denegar un pago íntegro debido a que su socio comercial tiene una relación con otra empresa del mismo grupo. Los acreedores partidarios de la consolidación pueden argumentar que habían contado con los bienes de la totalidad del grupo y que no sería justo que únicamente pudieran cobrar del patrimonio de una única entidad del grupo.

28. Dado que la consolidación supone la mancomunación de los bienes de distintas empresas de un grupo, no puede incrementar la suma cobrada por la totalidad de los acreedores, sino que más bien puede equilibrar las sumas cobradas entre los grupos de acreedores, incrementando los importes percibidos por algunos acreedores a expensas de los importes cobrados por otros. Además, la posibilidad de recurrir a la consolidación puede permitir a los acreedores más fuertes e importantes aprovechar bienes a los que no tienen acceso y a los que, en todo rigor de derecho, no deberían tener acceso; induciría a los acreedores que discrepan de tal mandamiento a solicitar su revisión, con la consiguiente prolongación del procedimiento de insolvencia; y repercutiría negativamente en la incertidumbre y la imprevisibilidad de las garantías reales (cuando los créditos entre entidades de un grupo desaparecieran a consecuencia de la consolidación, los acreedores que hubieran constituido garantías reales sobre dichos créditos perderían sus derechos).

b) Circunstancias que justifican la consolidación

29. Se ha determinado una serie de elementos que se consideran pertinentes para determinar si una consolidación de patrimonios está o no justificada, tanto en la legislación que autorice los mandamientos de consolidación como en el caso en que los tribunales hayan contribuido a formular estos mandamientos. En cada caso deben ponderarse los distintos elementos; ningún elemento es de por sí necesariamente concluyente, y no es preciso que todos ellos estén presentes en un

determinado caso. Los elementos son: la presencia o ausencia de estados financieros consolidados para el grupo; la utilización de una única cuenta bancaria para todas las entidades del grupo; la unidad de intereses y propiedad entre las empresas del grupo; el grado de dificultad que suponga el diferenciar el activo y el pasivo correspondiente a cada empresa; los gastos generales, contables, de gestión y gastos afines que compartan las distintas empresas del grupo; la existencia de préstamos internos y de contragarantías sobre los préstamos entre las empresas del grupo; el hecho de que se hayan traspasado bienes o de que los fondos hayan circulado de una empresa a otra por razones de conveniencia soslayando los requisitos formales del caso; la suficiencia del capital; la mezcla de bienes o de operaciones comerciales; el nombramiento de personal directivo o de gestión compartido y la celebración de reuniones combinadas de consejos de administración; establecimientos en el mismo lugar; tratos fraudulentos con acreedores; la práctica de inducir a los acreedores a tratar el grupo de sociedades como entidad única, creando así confusión entre los acreedores al no saber con cuál de las entidades del grupo estaban tratando, y por lo demás difuminando los límites jurídicos de las empresas del grupo; y si la consolidación facilitaría una reorganización o resguardaría los intereses de los acreedores. Otro factor determinante que justifica la consolidación podría ser que, de no dictarse un mandamiento de consolidación, la única manera de determinar el estado de las diversas deudas internas sería mediante procedimientos legales separados. Inevitablemente, esos procedimientos redundarían en un aumento de las costas y en la prolongación del procedimiento de liquidación, con la consiguiente merma de los fondos que, si no, se destinarían a los acreedores.

30. Aunque los numerosos factores enumerados siguen siendo pertinentes, algunos tribunales han comenzado a centrar su análisis en dos factores en particular, a saber, si los acreedores trataron con el grupo como unidad económica única y al concederle crédito no tuvieron en cuenta la identidad jurídica propia de cada empresa del grupo; y si los negocios de las empresas del grupo están tan entrelazados que la consolidación redundará en provecho de todos los acreedores.

c) Intereses concurrentes en la consolidación

31. Además de los intereses concurrentes de los acreedores de distintas empresas de un grupo de sociedades, justifica que se tengan en cuenta, en el contexto de la consolidación, los intereses concurrentes de los distintos tipos de acreedores: los de los acreedores y de los accionistas; los de los accionistas de las distintas empresas del grupo y, en particular, los de los que son accionistas de algunas de las empresas pero no de otras; y los de los acreedores garantizados y con derecho de prelación de las distintas empresas de un grupo consolidado.

i) Propietarios y accionistas

32. En muchos regímenes de la insolvencia se adopta la regla general de que los derechos de los acreedores sobrepasan los de los propietarios y accionistas, de modo que los créditos de propietarios y accionistas quedan subordinados a todos los otros créditos en el orden de prelación para la distribución⁹. La consecuencia de ello suele ser que los propietarios y accionistas no perciben nada en la distribución. En el contexto de un grupo de sociedades, los accionistas de algunas empresas del grupo

⁹ Guía Legislativa de la CNUDMI, segunda parte, cap. V, párr. 76.

que dispongan de un patrimonio importante y de pocas deudas pueden percibir una parte de la distribución cuando los acreedores de otras entidades del grupo con un patrimonio inferior y más deudas no puedan percibir una suma. Si el criterio general de poner a los acreedores no garantizados por delante de los accionistas se hiciera extensivo, en la consolidación, a la totalidad del grupo, todos los acreedores podrían cobrar antes de que los accionistas de cualquier empresa del grupo percibieran una suma de la distribución.

ii) Acreedores garantizados

33. Con respecto a los acreedores garantizados, tanto si son acreedores internos del grupo como si son acreedores externos, se plantea la cuestión de cómo deben regularse sus derechos en una consolidación. En la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia¹⁰ se analiza la posición de los acreedores garantizados en procedimientos de insolvencia y se adopta el criterio de que si bien, como principio general, habría que reconocer la eficacia y la prioridad de una garantía real y habría que preservar el valor económico de los bienes gravados en el procedimiento de insolvencia, un régimen de la insolvencia puede, aun así, modificar los derechos de los acreedores garantizados a fin de aplicar políticas comerciales y económicas, a reserva de las debidas salvaguardias.

34. Las cuestiones que podrían plantearse frente a una consolidación podrían ser, entre otras, la de si una garantía real constituida sobre la totalidad de los bienes de una empresa de un grupo o sobre una parte de ellos podía hacerse extensiva a los bienes de otra empresa del grupo cuando se dictara un mandamiento de consolidación, o si esa garantía real debería limitarse al conjunto definido de bienes con los que inicialmente había contado el acreedor garantizado; la cuestión de si los acreedores garantizados con una garantía insuficiente podían reclamar la deuda restante frente a los bienes consolidados como si fueran acreedores no garantizados; y la cuestión de si los acreedores garantizados internos, es decir, acreedores que son entidades pertenecientes al mismo grupo, deberían tratarse de forma diferente a los acreedores garantizados externos. Una solución respecto de los acreedores garantizados externos podría consistir en excluirlos del proceso de consolidación, llegando así a lo que sería una consolidación parcial. Los distintos acreedores garantizados que confiaron en la identidad jurídica independiente de las distintas empresas del grupo, así como los que confiaron en una garantía interna entre las empresas del grupo, podrían requerir una especial consideración. Cuando se requieran bienes gravados para una reorganización, podría aplicarse una solución diferente, por ejemplo, permitiendo que el tribunal ajustara el mandamiento de consolidación de modo que previera específicamente esos bienes. También es preciso tomar en consideración los intereses de los acreedores garantizados internos; entre las posibles soluciones cabría cancelar las garantías reales internas, dejar a los acreedores con un crédito no respaldado por una garantía, o modificar o subordinar esas garantías.

¹⁰ En el anexo I de la Guía Legislativa de la CNUDMI se enuncian las secciones de la Guía en las que se aborda la forma de tratar a los acreedores garantizados en procedimientos de insolvencia.

iii) Acreedores con prelación

35. Se plantean cuestiones similares con respecto a la forma en que deben regularse los acreedores con prelación. En la práctica, podrían beneficiarse o salir perjudicados de la mancomunación de los bienes del grupo, del mismo modo que otros acreedores no garantizados. Cuando el grado de prelación, como en la prelación de las prestaciones o impuestos de un empleado, se basa en el principio de la entidad única, se plantea la cuestión de cómo deberían tratarse las prelaciones dentro del grupo, especialmente cuando unas repercuten en otras. Por ejemplo, los empleados de una empresa del grupo que disponga de un patrimonio importante y de pocas deudas competirán potencialmente con los de otra empresa del grupo que se halle en la situación contraria, con un patrimonio inferior y muchas deudas si hay consolidación. Si bien por lo general los acreedores prioritarios podrían obtener un mejor resultado a expensas de los acreedores no garantizados sin prelación, los diferentes grupos de esos acreedores prioritarios podrían tener que ajustar toda expectativa que se basara en el principio de la entidad única.

d) Inclusión de empresas solventes del grupo en la consolidación

36. Como ya se señaló, la consolidación podría ampliarse de modo que incluyera a empresas solventes de un grupo de sociedades, ya sea porque esa empresa del grupo forma parte del procedimiento de insolvencia o porque los negocios de esa empresa están tan entremezclados con los de otras empresas del grupo que resultaría beneficioso incluir a la empresa en la consolidación. De ocurrir así, es posible que los acreedores de esa empresa solvente del grupo tengan objeciones particulares, por lo que convendría adoptar un enfoque limitado de modo que el mandamiento de consolidación se aplicara únicamente al capital social neto de la empresa solvente del grupo, a fin de proteger los derechos de esos acreedores.

e) Notificación de los acreedores

37. La posible incidencia de la consolidación en los derechos de los acreedores pone en evidencia que los acreedores afectados deberían tener el derecho a recibir notificación de toda solicitud de consolidación, así como el derecho a formular objeciones. Los intereses de los distintos acreedores que pudieran haber confiado en la identidad jurídica independiente de cada empresa del grupo al tratar con dicho grupo deberían ponderarse frente al beneficio general que se obtendría de la consolidación. Habría que estudiar la cuestión de si bastaría con una sola objeción para impedir la consolidación o si podría ordenarse, sin embargo, la consolidación. Puede ser posible, por ejemplo, que los acreedores que formularan objeciones por resultar notablemente desfavorecidos en caso de consolidación con respecto a otros acreedores perciban una suma de la distribución sustancialmente superior a la que percibirían otros acreedores no garantizados, haciendo así excepción al estricto criterio de la igualdad en la distribución. También cabría excluir a determinados grupos de acreedores que tuvieran ciertos tipos de contratos, por ejemplo, los acuerdos de financiación de proyectos con posibilidades limitadas de recurso concertados con empresas claramente identificadas de un grupo con condiciones comerciales negociadas con total independencia.

f) Otras cuestiones: momento en que procede dictar un mandamiento de consolidación y eventual aplicación ulterior de la consolidación a otras empresas del grupo

38. Entre las cuestiones suplementarias que habría que tener en cuenta con respecto a los mandamientos de consolidación cabe citar el momento en que procede dictar tal mandamiento (por ejemplo, si únicamente puede dictarse en una fase inicial del procedimiento o si puede dictarse posteriormente cuando resulte obvio que haciéndolo así se incrementaría el valor de la distribución entre los acreedores); y si es posible decidir que una consolidación ya existente englobe también a una empresa adicional del grupo. Si el mandamiento de consolidación se dicta con el consentimiento de los acreedores, o si se da a éstos la oportunidad de formular objeciones respecto del mandamiento propuesto, la inclusión de otra empresa del grupo en una fase avanzada del procedimiento puede hacer variar el conjunto de los bienes respecto de lo inicialmente convenido o de lo notificado a los acreedores. En tal situación, es conveniente que los acreedores dispongan de una nueva oportunidad para expresar su consentimiento o formular objeciones respecto de la inclusión de otra entidad en el ámbito de aplicación del mandamiento de consolidación.

Recomendaciones

Consolidación

21) El régimen de la insolvencia podrá permitir que el tribunal ordene que los procedimientos de insolvencia abiertos contra dos o más empresas de un grupo de sociedades se tramiten conjuntamente, como si se tratara de un procedimiento abierto contra una entidad única, siempre que ello sea adecuado. Al decidir si procede dictar tal orden, el tribunal podrá tener en cuenta:

a) El hecho de que los patrimonios de las empresas del grupo estén tan entremezclados que resulte imposible diferenciar a cuál de ellas corresponde la propiedad de los distintos bienes;

b) El hecho de que los acreedores hayan tratado con las empresas del grupo de sociedades como si se tratara de una única entidad económica y de que no hayan tenido en cuenta sus respectivas identidades jurídicas independientes a la hora de conceder crédito;

c) El grado en que la consolidación beneficiaría a todos los acreedores; y

d) [...]

Notas sobre las recomendaciones

39. En su 31º período de sesiones, el Grupo de Trabajo convino en que la consolidación podía ser apropiada sólo en determinadas circunstancias limitadas, y que los jueces precisarían criterios claros en función de los cuales pudieran evaluar las cuestiones pertinentes¹¹. En la recomendación 21) se reconoce que un tribunal podrá ordenar la consolidación en circunstancias apropiadas y se indican algunos de los criterios que podrían resultar pertinentes a la hora de determinar si esas

¹¹ Informe del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) sobre la labor de su 31º período de sesiones (A/CN.9/618, párrs. 37 y 42).

circunstancias se dan en un caso particular. En el párrafo 29 *supra* se enuncia una serie de ejemplos suplementarios de circunstancias potencialmente apropiadas.

D. Reorganización

[Referencia: Guía Legislativa, segunda parte, cap. IV y recomendaciones 139 a 159]

40. En la Guía Legislativa se regulan detalladamente cuestiones referentes a la reorganización y a la negociación, aprobación y ejecución de un plan de reorganización¹². Muchas de las cuestiones tratadas y las recomendaciones se aplicarán a la reorganización de dos o más empresas de un grupo de sociedades. Una cuestión no analizada es la de si puede proponerse un único plan de reorganización para dos o más empresas de un grupo.

41. Cuando se abren procedimientos de reorganización contra dos o más empresas de un grupo, con independencia de si esos procedimientos pueden o no administrarse conjuntamente, cabe plantearse si la reorganización de las empresas deudoras podrá efectuarse con arreglo a un único plan que pueda permitir economías en el conjunto de procedimientos de insolvencia del grupo, garantizar un enfoque coordinado de la solución de las dificultades financieras del grupo, y obtener el máximo valor en beneficio de los acreedores. En varios regímenes de la insolvencia se permite la negociación de un único plan de reorganización. En algunos regímenes este enfoque sólo es posible cuando los procedimientos están conjuntamente administrados o consolidados. Cuando esto no está permitido, en general sólo sería posible un plan de reorganización unificado cuando los procedimientos se pudieran coordinar en la práctica.

42. Si el régimen de la insolvencia permitiera un plan unificado de reorganización, sería preciso estudiar la aplicación de una serie de disposiciones de la Guía Legislativa referentes a la reorganización de un único deudor frente a un grupo de sociedades. Cabría agregar disposiciones pertinentes relativas a: las partes habilitadas para proponer el plan o para participar en su elaboración¹³; la naturaleza y el contenido del plan¹⁴; las salvaguardias relativas al plan¹⁵; la convocatoria y celebración de juntas o asambleas de acreedores para examinar el plan; la clasificación de los créditos y de las categorías de acreedores¹⁶; los mecanismos de voto aplicables a los acreedores y aprobación de un plan¹⁷; objeciones a la aprobación del plan (o su confirmación, cuando proceda)¹⁸; y la ejecución del plan¹⁹.

43. En todo plan único de reorganización habrán de tenerse en cuenta los diversos intereses de los distintos grupos de acreedores, incluida la posibilidad de que puede tener que prever tasas de distribución diferentes para los acreedores de distintas empresas del grupo. También habría que lograr un equilibrio apropiado entre los

¹² Guía Legislativa de la CNUDMI, segunda parte, cap. IV.

¹³ *Ibid.*, párrs. 8 a 14.

¹⁴ *Ibid.*, párrs. 3 a 5 y 17 a 25.

¹⁵ *Ibid.*, párrs. 54 a 63.

¹⁶ *Ibid.*, párrs. 27, 36 y 37 y 41 a 43.

¹⁷ *Ibid.*, párrs. 27 a 51.

¹⁸ *Ibid.*, párrs. 53 a 63.

¹⁹ *Ibid.*, párrs. 69 a 71.

derechos de esos distintos grupos de acreedores con respecto a la aprobación del plan, inclusive mayorías apropiadas, tanto para los acreedores de una única empresa del grupo como entre los acreedores de distintas empresas del grupo. Por ejemplo, si los acreedores de una de las diversas empresas del grupo rechazaban el plan, ¿significaría esto que no podría aprobarse el plan? Un enfoque del problema podría basarse en disposiciones aplicables a la aprobación de un plan de reorganización para un único deudor. Otro método consistiría en formular distintos requisitos de mayorías con el fin concreto de facilitar la aprobación del plan en el contexto del grupo. Cabría también prever salvaguardias análogas a las que figuran en la recomendación 152 de la Guía Legislativa, agregando el requisito suplementario de que el plan debería ser equitativo en la relación entre los acreedores de las distintas empresas del grupo.

44. La recomendación 152 de la Guía Legislativa dispone lo siguiente:

Confirmación de un plan aprobado

152. Cuando el régimen requiera la confirmación judicial de un plan aprobado, debería exigir que el tribunal confirmara el plan si éste cumple las condiciones siguientes:

- a) que se haya obtenido la aprobación requerida y se haya seguido debidamente el procedimiento prescrito para la aprobación;
- b) que los acreedores reciban con arreglo al plan un valor que sea al menos equivalente al que habrían recibido en un procedimiento de liquidación, salvo que dichos acreedores hayan expresamente convenido en recibir un trato menos favorable;
- c) que nada de lo dispuesto en el plan sea contrario a derecho;
- d) que se vaya a pagar plenamente todo crédito o gasto administrativo, salvo en la medida en que el beneficiario de dicho crédito o gasto convenga en que se le otorgue un trato distinto; y
- e) salvo en la medida en que las categorías de acreedores afectadas hayan acordado otra cosa, si una categoría de acreedores ha votado contra el plan, esa categoría se reconocerá como tal, con arreglo al plan, en el régimen de la insolvencia, y en la distribución que se efectúe conforme al plan deberá tenerse en cuenta la prelación reconocida.

45. Un régimen de la insolvencia podría también incluir disposiciones en que se regularan las consecuencias del hecho de que no se aprobara el plan de reorganización tratado en la recomendación 158, especialmente cuando puedan incluirse en el plan empresas solventes de un grupo de sociedades. Por ejemplo, hay un régimen que prevé que la consecuencia de que no se apruebe un plan será la liquidación de todas las empresas insolventes del grupo.

46. La recomendación 158 de la Guía Legislativa dispone lo siguiente:

Conversión del procedimiento de reorganización en liquidación

158. El régimen de la insolvencia debería permitir que el tribunal convirtiera el procedimiento de reorganización en liquidación en los siguientes supuestos:

- a) *cuando, al término de un plazo prescrito por el régimen, no se hubiera propuesto ningún plan y el tribunal no hubiera concedido ninguna prórroga del plazo;*
- b) *cuando no se aprobara un plan propuesto;*
- c) *cuando no se confirmara un plan aprobado (si el régimen requiere su confirmación);*
- d) *cuando se impugnara con éxito un plan aprobado o confirmado; o*
- e) *cuando se hubiera producido un incumplimiento sustancial de las condiciones del plan por parte del deudor (o cuando fuera imposible ejecutar el plan).*

Recomendaciones

Plan de reorganización unificado

22) El régimen de la insolvencia podrá permitir que se proponga un plan de reorganización unificado para dos o más empresas de un grupo de sociedades que estén sujetas a procedimientos de insolvencia.

23) El régimen de la insolvencia podrá disponer que una empresa solvente del grupo de sociedades que no esté sujeta a los procedimientos de insolvencia podrá ser incluida en un plan de reorganización unificado cuando el tribunal determine que dicha inclusión redundará en beneficio de todo el grupo de sociedades.

Notas sobre las recomendaciones

47. En las recomendaciones 22) y 23) se enuncian los principios básicos de que un régimen de la insolvencia podrá permitir que se proponga un plan de reorganización unificado que abarque a dos o más empresas de un grupo contra las que se hayan abierto procedimientos de insolvencia, y que podrá incluirse en el plan una entidad solvente del grupo que no esté sujeta a esos procedimientos de insolvencia, cuando tal inclusión redunde en beneficio del grupo en su totalidad.

48. Tomando en consideración el análisis recogido en los párrafos 42 a 44 *supra*, el Grupo de Trabajo tal vez desee plantearse la posibilidad de agregar al texto otras recomendaciones que regulen cuestiones de contenido, en particular la de hasta qué punto puede ser posible o necesario que se apliquen distintas tasas de prorrateo en la distribución a los distintos grupos de acreedores; la aprobación; las salvaguardias; el caso en que no se ejecute el plan; y otras cuestiones enunciadas en las recomendaciones 139 a 159 de la Guía Legislativa.

E. Otras cuestiones

49. Además de las cuestiones que se han indicado, el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar cuestiones que hasta ahora no se han tratado y que serían:

- a) La aplicación de las recomendaciones 69 a 86 de la Guía Legislativa, que regulan el régimen aplicable a los contratos, en caso de insolvencia de dos o más empresas de un grupo de sociedades, en particular cuando esos contratos hayan sido celebrados entre empresas del grupo;

b) Consideraciones particulares que serían aplicables a la participación de los acreedores en procedimientos de insolvencia en el contexto de un grupo de sociedades en que uno o varios de los acreedores pudieran ser empresas pertenecientes al mismo grupo y que estuvieran o no sujetos al mismo procedimiento de insolvencia;

c) La posibilidad de establecer un único comité de acreedores para cada empresa del grupo o para cada tipo de acreedor a nivel de todo el grupo;

d) Con respecto a la representación de los acreedores, consideraciones especiales que fueran de interés para la aplicación de las recomendaciones 126 a 136 de la Guía Legislativa, que regulan la participación de los acreedores. Presumiblemente, las empresas de un grupo que fueran acreedoras de otras entidades del mismo grupo serían consideradas partes allegadas a los efectos de la recomendación 131 y, por consiguiente, no se les daría el derecho a participar en comités de acreedores;

e) La aplicación a una empresa de un grupo de sociedades de las recomendaciones 137 y 138 de la Guía Legislativa, que regulan los derechos de las partes interesadas a ser oídas y a apelar: como se explica en la Guía Legislativa, en el concepto de “parte interesada” entraría una empresa de un grupo de sociedades por diversas vías posibles, ya sea como un deudor más en procedimientos conjuntos, como acreedor, como accionista, o simplemente por ser otra empresa del mismo grupo;

f) Consideraciones especiales que podrían ser aplicables a la presentación de créditos por otras empresas del mismo grupo, como un examen especial al igual que en el caso de los créditos de personas allegadas conforme a la recomendación 184 de la Guía Legislativa.

[IV. Las “cuestiones de ámbito internacional” se abordan en el documento A/CN.9/WP.76/Add.2]